CORPORINOQUIA

Exp. No. 200.32.7.21-158

AUTO NO. 200.6-21-2287 ***FECHA.*** 10 NOV 2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL"

El profesional universitario encargado de las funciones de la Secretaria General de la Corporación Autónoma de la Orinoquia CORPORINOQUIA, en uso de las facultades estatutarias, legales y en especial las conferidas mediante la Resolución de la Dirección General N° 400.36.21.1310 de 26 de octubre del 2021 de conformidad con el procedimiento establecido en la ley 1333 de 2009 y,

I. ANTECEDENTES

Que mediante radicados No. YO-2020-03505 del 12 de marzo de 2020, con número VITAL 0600000000000149017, (fol. 1-3) y No. YO-2020-06365 del 17 de julio de 2020, con número VITAL 0600000000000158828, (fol. 4-9) se interpusieron quejas ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA, en relación con lo siguiente respectivamente:

"El día 2 de febrero visitamos nuestra finca denominada La Carraca ubicada en la vereda La Mata de Urama (…) donde nos habían informado que el día 30 de enero del presente año la señora (…) ingreso al predio anteriormente descrito por invasión de terreno y realiza quemas no controladas de más de 200 has."

"(…) Por lo anterior, me permito sea atendida por funcionarios de CORPORINOQUIA, quema de bosque natural, pastos, sabanas, en un área de 250 has aproximadamente (…)".

Que mediante Auto No. 500.13.1.20.032 de 24 de mayo de 2021, dispuso iniciar etapa de indagación preliminar y se ordenó la práctica de visita técnica al lugar descrito en la queja presentada. (fol. 13-14).

Que el día 24 de mayo de 2021 se realizó visita al lugar de los hechos, emitiéndose Concepto Técnico No. 500.8.2.21-0393 de 19 de agosto de 2021. (fol. 17-22).

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL

El día 24 de mayo de 2021, profesionales de la Subdirección de Control Ambiental de esta Corporación, realizaron visita de inspección ocular al lugar de los hechos descritos en la queja, trasladándose a los predios de La Carraca y La Envidia, vereda Tunupe, Municipio de Tauramena, Departamento de Casanare, con el objetivo de verificar la ocurrencia de los hechos denunciados y determinar si éstos constituían infracción ambiental.

Como resultado de la visita se emitió el Concepto Técnico No. 500.8.2.20-0393 de 19 de agosto de 2021, que sirve como insumo de motivación del presente acto administrativo y del cual se cita:

"4. CONCEPTO TÉCNICO

En atención a la indagación preliminar N° 500.13.1.21.032 del 24 de mayo del 2021 y lo evaluado en el proceso de su realización, se determinó como presuntos infractores a los señores Giovanny Pinilla Serrato identificado con cédula de ciudadanía número 88044565, Magda Roció Pérez Piragenta identificada con cédula de ciudadanía número 40437012 y/o Ángela Pinilla identificada con cédula de ciudadanía número 40218635, ya que en campo se observó vestigios de la quema abierta realizada en el año 2020 sobre los troncos de algunos árboles en los predios La Carraca y La Envidia ubicados en la vereda Tunupe jurisdicción del municipio de Tauramena, departamento de Casanare, a pesar de que el área afectada ya se habla revegetalizado. Adicionalmente, para la verificación del área se realizó un análisis satelital con imágenes en Infrarrojo Cercano, infrarrojo lejano y salud de la vegetación a partir del cual se determinó un área afectada por quema abierta de aproximadamente 460 ha de extensión, sobre cobertura de Bosque Fragmentado y Sabanas Inundables. Por otra parte, se percibió los rastros (Huellas del tractor) donde se mecanizó el suelo para el cultivo del arroz en el predio La Carraca. Por ende, se determina que la actividad realizada por los presuntos infractores generó impactos negativos en los componentes Aire, flora, fauna, suelo y paisajismo del área intervenida, localizada en las coordenadas geográficas Datum WGS84 Latitud: 5°53'17.97"N Longitud: 71°49'6.30 O, se resuelve que infringió lo estipulado en el artículo 2.2.5.1.3.12 del Decreto 1076 del 2015, el cual establece que queda prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio nacional, y, lo estipulado en el artículo 2.2.5.1.7.2. del decreto 1076 de 2015 y la resolución 532 del 2005, por no haber tramitado ante Corporinoquia el permiso de emisiones atmosféricas para quemas abiertas controladas en áreas rurales para la preparación del suelo en actividades agrícolas, con extensiones iguales o superiores a 25 hectáreas.

Por otra parte, según lo reglamentado en la resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, (metodología para la tasación de multas, numeral 1°, artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 expedida por el

AUTO NO. 200.6-21-2287 **FECHA.** 10 NOV 2021

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), se realizó la valoración por "Afectación Ambiental, resolviéndose que en cuanto al beneficio ilícito, no se encontraron no se tuvo ni ingresos directos pero si costos evitados por no haber tramitado ante Corporinoquia el permiso de emisiones atmosféricas, Respecto al grado de afectación se pondera como "Critico" (66), factor de temporalidad hace referencia a uno (1). capacidad de detección de la conducta se pondera como "BAJA, circunstancias atenuantes y agravantes: en este caso no se encontraron circunstancias atenuantes ni agravantes, costos asociados no se generaron y en cuanto a la capacidad socioeconómica de los presuntos infractores, los señores Giovanny Pinilla Serrato identificado con cédula de ciudadanía número 88044565, Magda, Roció Pérez Piragenta identificada con cédula de ciudadanía número 40437012 y/o Ángela Pinilla identificada con cédula de ciudadanía número 40218635 no se encuentran registrados en la base de datos del Departamento Nacional de Planeación".

III. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

Que la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada por la Conferencia de las Naciones Unidas del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, proclamó una serie de principios, entre los cuales se encuentran:

PRINCIPIO 2

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y **la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados** o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

PRINCIPIO 11

Los Estados deberán **promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente**. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.

PRINCIPIO 15

Con el fin de proteger el medio ambiente, **los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades**. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Que, en armonía con el anterior instrumento internacional, la Constitución Política de Colombia, denominada Constitución Ecológica por la Corte Constitucional, en su desarrollo ha establecido los lineamientos en la política ambiental del país, por ejemplo, en su artículo 8° señala que *"es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y **naturales** de la nación".*

Que en el artículo 49 establece como servicio público a cargo del Estado el saneamiento ambiental, además, el artículo 79 advierte, entre los derechos colectivos, la garantía que tiene toda persona de gozar de un ambiente sano.

En ese mismo sentido el artículo 58 le otorga a la propiedad privada la función ecológica inherente y el artículo 80 advierte sobre la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y con ello garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, la administración deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, **imponer las sanciones legales** y **exigir la reparación de los daños causados**.

El artículo 95 de la Constitución señala que uno de los deberes del ciudadano es proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

IV. FUNDAMENTOS LEGALES

Que, en complemento del marco constitucional, existía en la legislación nacional el Decreto 2811 de 1974 -Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente - que en su artículo 1° otorga al ambiente de patrimonio común y advierte que: *"el Estado y **los particulares deben participar en su preservación y manejo**, que son de utilidad pública e interés social".*

A su vez la Ley 99 de 1993 asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales las funciones señaladas en los numerales 2 y 17 del artículo 31, que a la letra dicen:

Artículo 31. *Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:*

2. Ejercer la función de ***máxima autoridad ambiental*** *en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Medio Ambiente.*

17. ***Imponer y ejecutar a prevención*** *y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades,* ***las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley****, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.*

Que, entre otros aspectos, el Titulo XII ibídem de esa misma normatividad, señala el tipo de medidas preventivas y las sanciones a imponer al infractor de normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables; de igual forma, precisa que la imposición de multas no exime al infractor de la ejecución de obras o medidas ordenadas por la autoridad ambiental responsable del control, ni la obligación de restaurar el medio ambiente.

Que especialmente la Ley 1333 de 2009, a través de la cual se señala el procedimiento sancionatorio ambiental, en su artículo 1° advierte que la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental está a cargo del Estado a través del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, entre otras.

Que en los términos del parágrafo de ese artículo en concordancia con el parágrafo 1° del artículo 5°, en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo que dará lugar a la imposición de las medidas preventivas correspondientes, además, advierte que el infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción que sobre él recae, para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Que en el artículo 5° ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables – Decreto Ley 2811 de 1974-, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en **las demás disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente**; igualmente es constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que, en todo caso, las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio ambiental.

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, establece que el proceso sancionatorio se iniciará mediante acto administrativo motivado y se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.

V. DE LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Que es obligación de esta Corporación, por mandato superior, mediante el cumplimiento de las funciones asignadas legalmente y en el ámbito de su competencia, hacer efectivos los preceptos constitucionales y legales dentro del marco del estado social de derecho.

En la visita del 24 de mayo de 2021, se determinó como presuntos infractores a los señores Giovanny Pinilla Serrato, identificado con cédula de ciudadanía número 88.044.565, Magda Roció Pérez Piragenta, identificada con cédula de ciudadanía número 40.437.012 y/o Ángela Pinilla, identificada con cédula de ciudadanía número 40.218.635, quienes según concepto técnico mentado, realizaron una quema abierta en el año 2020 sobre los troncos de algunos árboles en los predios ya referidos anteriormente, además se determinó un área afectada por quema abierta de aproximadamente 460 hectáreas de extensión en Bosque Fragmentado y Sabanas Inundables.

Igualmente, se verifico en el Sistema de Información de Tramites Ambientales – SILAMC (y en las bases de datos de Corporinoquía, que los señores **GIOVANNY PINILLA SERRATO**, identificado con cédula de ciudadanía número 88.044.565, **MAGDA ROCIÓ PÉREZ PIRAGENTA**, identificada con cédula de ciudadanía número 40.437.012 y/o **ÁNGELA PINILLA** identificada, con cédula de ciudadanía número 40.218.635, no cuentan con el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por esta Corporación y por tanto no está dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015.

Por lo anterior se le recuerda al presunto infractor que las disposiciones contenidas en la normatividad vigente y en los instrumentos de control y manejo ambiental, están dirigidas a conciliar la actividad económica, con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano; por lo tanto, su incumplimiento constituye contravención a las normas ambientales, en los términos del Artículo 5° de la Ley 1333 del 2009.

En virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, esta Corporación está facultada para realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.

De acuerdo con lo anterior, esta Autoridad desplegara todas las diligencias administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar todo tipo de diligencias, incluyendo visitas técnicas al lugar de los hechos.

VI. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA SECRETARÍA GENERAL

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, mediante la cual se establece el régimen sancionatorio ambiental, se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, el Decreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; igualmente es constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, mediante la cual se establece el régimen sancionatorio ambiental, se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, el Decreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; igualmente es constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que en consecuencia serán sujetos de imposición de las medidas sancionatorias, aquellas personas que actúen conforme lo señala el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

Que las sanciones solamente podrán ser impuestas por la Autoridad Ambiental competente, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio ambiental, en los términos de la Ley 1333 de 2009.

En el desarrollo de la visita realizada el día 24 de mayo de 2021 por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA al lugar de los hechos señalados, se evidenció la trasgresión de la normatividad ambiental vigente, al realizar quema abierta sin el respectivo permiso de aprovechamiento forestal, establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 del 2015.

Por lo anteriormente expuesto, se iniciará actuación sancionatoria ambiental en contra de los señores **GIOVANNY PINILLA SERRATO**, identificado con cédula de ciudadanía número 88.044.565, **MAGDA ROCIÓ PÉREZ PIRAGENTA**, identificada con cédula de ciudadanía número 40.437.012 y/o **ÁNGELA PINILLA** identificada, con cédula de ciudadanía número 40.218.635, por incumplimiento a lo establecido con los artículos 2.2.1.1.7.1 del decreto 1076 de 2015.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tendrá como elemento probatorio el Concepto Técnico No. 500.8.2.20-0393 de 19 de agosto de 2021, contentivo de los hallazgos evidenciados en campo el día 24 de mayo de 2021, documento que reposa en el expediente sancionatorio ambiental No.

200.32.7.21.158 y que quedará a disposición del presunto infractor para que ejerza el derecho de contradicción y defensa, a quien se ordenará notificar el contenido del presente acto administrativo en los términos del artículo 67 y s.s., de la Ley 1437 del 2011.

De igual forma, esta Autoridad investigará si los hechos referenciados en el mencionado concepto técnico y aquellos que le sean conexos constituyen infracciones ambientales, en los términos del Artículo 5° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Es de anotar que esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, en el marco del derecho al debido proceso, comunicando de manera formal el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental y salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, siendo conductas que rigen la actuación de esta Autoridad.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, se dispondrá la publicación del presente acto administrativo, con el fin de garantizar la intervención de los ciudadanos.

Que, en mérito de lo expuesto, el Profesional Universitario encargado de las funciones de secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental en contra de los señores **GIOVANNY PINILLA SERRATO**, identificado con cédula de ciudadanía número 88.044.565, **MAGDA ROCIÓ PÉREZ PIRAGENTA**, identificada con cédula de ciudadanía número 40.437.012 y/o **ÁNGELA PINILLA** identificada, con cédula de ciudadanía número 40.218.635, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como elemento probatorio el Concepto Técnico No. 500.8.2.20-0393 de 19 de agosto de 2021, contentivo de los hallazgos evidenciados en campo el día 24 de mayo de 2021, documento que reposa en el expediente sancionatorio ambiental No. 200.32.7.21.158.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de esta decisión a los señores **GIOVANNY PINILLA SERRATO**, identificado con cédula de ciudadanía número 88.044.565, **MAGDA ROCIÓ PÉREZ PIRAGENTA**, identificada con cédula de ciudadanía número 40.437.012 y/o **ÁNGELA PINILLA** identificada, con cédula de ciudadanía número 40.218.635, o a quien en forma expresa autoricen, para tal efecto, a los predios La Carraca y La Envidia ubicados en la vereda Tunupe, jurisdicción del municipio de Tauramena, departamento de Casanare, conforme a las disposiciones prescritas en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, en concordancia con los artículos 67 y s.s., de la ley 1437 de 2011.

Parágrafo. - De conformidad con el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 1437 de 2011, el presunto infractor podrá remitir sus escritos, al correo electrónico atencionusuarios@corporinoquia.gov.co.

ARTÍCULO QUINTO: Por secretaría, comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios del Departamento de Casanare, para lo de su competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, enviándole copia del presente proveído.

ARTÍCULO SEXTO Ordenar a la Oficina de Sistemas de la Corporación, publicar el presente acto administrativo en la página web de CORPORINOQUIA de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y una vez surtido este trámite deberá allegar al expediente copia de la publicación que evidencie su cumplimiento.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste conforme lo establecen el artículo 69 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009; para

CORPORINOQUIA

Exp. No. 200.32.7.21-158

AUTO NO. 200.6-21-2287 ***FECHA.*** 10 NOV 2021

efectos del trámite de las peticiones de intervención aplicar lo señalado por el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto no procede recurso alguno, de conformidad con lo señalado por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RICARDO LEÓN RUEDA
Profesional Universitario encargado de las funciones de la Secretaría General.

Proyectó: *Brayan Alexander Walteros / Abogado S. G – CPSP. 120-12-13-21-492 del 14/10/2021*